



7. Las masas sin Perón

Los rostros del antipopulismo de la Libertadora a 1976¹

##

Incendiar los símbolos, destrozarse el pasado, comenzar de cero. El rechazo vitriólico al peronismo como una deformación de la participación de las masas en la política puso bajo un mismo techo ideas políticas varias, incompatibles entre sí. Pero que en 1955 coincidían en entender que la violencia contra el peronismo era un recurso legítimo para erradicar al populismo del país. [Reacciones tras el golpe de Estado en 1955](#), *El Descamisado*, año 1, n° 2, 29 de mayo de 1973.

##

¹ Este capítulo forma parte del libro de Semán, Ernesto (2021). *Breve historia del antipopulismo. Los intentos por domesticar a la Argentina plebeya, de 1810 a Macri*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores. El capítulo debe citarse incluyendo la referencia completa.

En agosto de 1951, el sociólogo norteamericano Seymour “Marty” Lipset recibió en su oficina de la Universidad de Columbia a uno de sus estudiantes de maestría. Por aquel entonces, Lipset comenzaba a abandonar el marxismo y garabateaba sus primeras ideas sobre el comportamiento de los individuos en democracia. El estudiante, con una seguridad de sí mismo por encima de la del común de los jóvenes veinteañeros, sabía muy bien lo que quería hacer con su programa académico: buscaba entender el peronismo “para aprender cómo hacer para eliminarlo”.

—¿Leyó *El 18 Brumario de Luis Bonaparte*?—, le preguntó Lipset a su estudiante, buscando en los estantes el libro en el que Marx analiza cómo el sobrino de Napoleón combinó el personalismo con el poder del Estado para encabezar una alianza heterogénea de sectores sociales en la cual los trabajadores perdían su autonomía y morían las esperanzas revolucionarias que la clase trabajadora había liderado en 1848.

—No—, contestó el estudiante.

—Entonces léalo.

El estudiante era Torcuato Di Tella. Ese día, el peronismo entró definitivamente en el radar de Lipset, quien en sus escritos posteriores lo convirtió en el paradigma de una forma de “autoritarismo de la clase trabajadora” en oposición a la cual edificó la noción moderna de “excepcionalismo norteamericano”. Para Di Tella, fue el comienzo de una relación intensa entre estudios sobre el peronismo, marxismo y teorías de la modernización, un tridente sobre el que se forjó el nacimiento de la sociología en la Argentina. La preocupación por el populismo como una forma defectuosa de modernización de las masas que debía ser contenida y combatida tomaba forma en esos intercambios iniciales. Aquel encuentro iba a ser trascendente no solo para él y para Lipset, sino para los estudios sobre democracia y política de masas en los años cincuenta y sesenta en el mundo.

Di Tella regresó a la Argentina dos años después de ese encuentro inicial, con un título de magíster y una receta para dejar atrás el peronismo. En 1955 fue uno de los fervientes miembros de los comandos civiles que dieron apoyo al golpe de Estado contra Perón. En los veinte años posteriores al golpe, el paisaje político del antipopulismo cambió radicalmente. Durante el gobierno de Perón, intelectuales y dirigentes opositores habían mantenido líneas de diálogo inexplicables en cualquier otro contexto, canales de reflexión a partir de los que creció una especie de corteza común a identidades políticas dispares: en todas estaba la convicción de que el peronismo era un problema y la tarea de erradicarlo se encontraba, casi siempre, por encima de las distancias entre ellos.

Eso jamás volvió a ocurrir. Tras la caída de Perón estallaron mil formas de antipopulismo irreconciliables entre sí, radicalmente contrapuestas, trágicamente enfrentadas. Visiones opuestas del país, la política y la libertad para las que la noción de que el peronismo era un problema, que antes había sido todo, ahora era solo el comienzo. Buena parte de la guerrilla de izquierda, el maoísmo, el foquismo, la izquierda política, parte importante del sindicalismo combativo, las ciencias sociales y la historia, los movimientos democráticos liberales, una amplia gama de la ultraderecha, las expresiones tempranas del pensamiento económico neoliberal, extensos sectores de las Fuerzas Armadas y de grupos paramilitares de extrema derecha: esta es una lista parcial de los sectores que basaron su accionar, y en muchos casos el enfrentamiento a muerte entre ellos, en la percepción de que la Argentina tendría futuro si superaba el legado peronista. En muchos de estos casos, la búsqueda de este objetivo implicaba alguna forma de convivencia o alianza con el propio peronismo, pero siempre contenidos por la idea de que la integración de los trabajadores a la política nacional de la mano de aquel líder había sido un mal paso.

Este fue también el período en el que el término “populismo” se hizo presente con fuerza por primera vez como categoría de análisis y como concepto político. De ese modo adquirió rasgos específicos, reemplazando y compitiendo con expresiones como “movimientos nacional populares” o “nacionalismo popular” que habían sido excluyentes en el pasado. En todos los casos, la experiencia histórica frente a la que se construían estas herramientas teóricas eran las del fascismo europeo. Probablemente haya sido Gino Germani quien trabajó con más cuidado el fenómeno y quien comenzó a utilizar el concepto “populismo”, primero en los márgenes y luego más hacia el centro de su producción teórica. El desarrollo de esta categoría de análisis le permitía a Germani, quien colaboró largamente con Di Tella, hacer el pasaje entre la política y las ciencias sociales, entre sus convicciones políticas y sus intuiciones teóricas. Era, como sugiere el título del libro que la hija dedicó a su trabajo, un camino que iba “del antifascismo a la sociología”. Como fundador de la sociología en la Argentina, Germani daría así a las ciencias sociales su rasgo distintivo, su pecado original profundamente nacional: la obsesión con los orígenes del peronismo y la constitución del fascismo como la referencia histórica ineludible desde la cual estudiar la integración de las masas a la política.

Mucho más allá de Germani, esta inauguración del término “populismo” tenía al menos tres características compartidas por casi todos los intelectuales. Una era que el populismo, como formulación política, era un es-

quema triangular. Había un líder en el vértice superior, que establecía una relación emocional inmediata con los trabajadores (uno de los ángulos inferiores) eludiendo ya fuera las instituciones republicanas o la creación de una conciencia de clase basada en las condiciones materiales de existencia. Sobre ese sustento emotivo, la relación entre el líder y las masas producía una agenda política radicalmente movilizadora basada en una confrontación binaria entre el pueblo y el antipueblo (la tercera punta del triángulo). Un segundo juicio compartido por muchos, y sobre el que se abrirían distintas líneas de investigación, era, como lo describimos en el capítulo anterior, que esa adhesión emocional de las masas a un líder demagogo era el producto de una transición acelerada de los sectores populares desde la sociedad tradicional a las sociedades modernas. Un último punto común era que el populismo, en su encarnación peronista, era un fenómeno autoritario. Esta definición abrió el campo para ideas contrapuestas. Para la derecha liberal, la idea de autoritarismo permitió introducir al peronismo como un fenómeno totalitario y, de esa manera, incorporar a la Argentina al universo de la Guerra Fría, y a la amplia gama de enemigos que debía enfrentar cualquier proyecto civilizatorio. Para la izquierda, en cambio, el componente autoritario del populismo se relacionaba con la imposición, por la emoción o la fuerza, de una agenda “nacional” que subsumía los intereses de los trabajadores en una mezcla más amplia que preservaba las relaciones capitalistas de producción. La sociología proveyó herramientas teóricas y conceptuales para ambos argumentos. La historia abasteció el debate con un recorrido relativamente nostálgico del pasado nacional desde el apogeo del orden conservador. La literatura introdujo en esa disyuntiva una variedad de juicios y reflexiones sobre qué constituía la cultura de masas y cómo se relacionaba con una idea de “tradicción nacional”.

Finalmente, y como revela el episodio inicial de este capítulo, estos debates se alimentaron de una conversación internacional cada vez más omnipresente. La sociología argentina se produjo en diálogo con el funcionalismo norteamericano, al que facilitó al mismo tiempo experiencias históricas y conceptos que formarían ideas, teorías y políticas sobre la sociedad de masas en los Estados Unidos.

La Guerra Fría, a su vez, fue parte del desarrollo del antipopulismo de formas variadas. Por un lado, entregó recursos retóricos, económicos y bélicos globales para endurecer las posiciones más recalcitrantes de las élites contra el fantasma del caos social derivado de la redistribución de ingresos. Por el otro, el antipopulismo contribuyó a esta cruzada con una idea más amplia que el comunismo como enemigo: en sentidos fundamentales, la Guerra Fría en América Latina tuvo menos que ver con aquel conflicto ideológico y geopolítico entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, y más con el conflicto social por la expansión de derechos y de poder económico en sociedades en las que los movimientos nacional populares (a veces combinados con el comunismo, a veces en contra de este) eran una amenaza prevalente contra el statu quo. La Revolución Cubana en 1959 y su influencia decisiva en la historia de América Latina fue reveladora de ese complejo mapa político, al mismo tiempo que ayudó a producirlo. Desde La Habana hasta Buenos Aires, la opción por la lucha armada fue sobre todo producto de la frustración con los límites que los proyectos populistas habían mostrado para producir una reforma social profunda y sustentable en la región. Y al mismo tiempo, el elefante blanco seguía ahí, irredento y central. Si el impacto de la Revolución Cubana en la Argentina fue enorme, se reinterpretó muchas veces en clave de una pregunta que precedía y excedía a Fidel Castro: ¿cómo contribuye el análisis de aquella revolución caribeña al entendimiento del peronismo?

En medio de estas discusiones, muchas de las fuerzas que habían contribuido al final del gobierno peronista ponían en marcha un lento y contradictorio –pero sistemático– desmantelamiento de su herencia. La estructura social legada por el populismo fue lo suficientemente resistente como para que el país disfrutara una distribución de los recursos más igualitaria que casi todo el resto de América Latina. Y fue lo suficientemente duradera como para sobrevivir más de cuatro décadas salvajes, hasta la estocada final a manos de, sorprendente o no, un gobierno peronista como el de Carlos Menem. Pero el desmantelamiento del robusto Estado de bienestar montado en la década peronista fue permanente desde el día mismo del golpe en pequeños cambios y grandes decisiones que fueron reconfigurando la estructura social argentina. Para mediados de los años sesenta, algunos de los principales rasgos de la Argentina peronista, desde su estructura impositiva hasta el lugar de los sindicatos en las negociaciones, pasando por la calidad de vida de las clases bajas y medias, mostraban signos de crisis y agotamiento. El reemplazo de la Argentina peronista por otra nueva e imprevisible le dio forma al antipopulismo de derecha y le proveyó una misión y una organicidad en el tiempo hasta la llegada de la dictadura militar de 1976.

A desnazificar, a desnazificar

Uno de los primeros análisis sobre las distintas formas del antipopulismo posterior al golpe vino en 1956 de la pluma de Mario Amadeo, un ferviente antiperonista que llegó a cancelar de la Revolución Libertadora durante la brevísima presidencia de Eduardo Lonardi. Amadeo cifraba el futuro en la posibilidad de unir al país en un proyecto restaurador, e identificaba cuatro visiones distintas sobre el “hecho peronista”. Una era la de los conservadores, para quienes “el peronismo no ha sido otra cosa que una pesadilla” que se dejaría atrás mediante un gobierno enérgicamente represivo que erradicara la experiencia histórica mediante la “desperonización”. La segunda pertenecía a un subgrupo dentro de los conservadores, que también veía la historia reciente como un calvario, pero creía que las huellas que había dejado el peronismo serían, lamentablemente, mucho más perdurables. Una tercera visión era la de la izquierda liberal del Partido Socialista, el Demócrata Progresista y sectores del radicalismo, para quienes el peronismo seguía siendo sinónimo de fascismo, por lo cual “desperonización” también era “desnazificación”. La última perspectiva era la de la izquierda antiliberal que, según Amadeo, veía en el peronismo una forma “cruda y primitiva pero eficaz de la lucha contra el imperialismo” y aspiraba a ocupar el liderazgo del proletariado que Perón había dejado vacante.

Son veinte años vertiginosos para interpretar y combatir al populismo, dos décadas en las que el consenso inicial de desperonizar a la Argentina estallaría rápidamente en mil pedazos. Aramburu reemplazó a Lonardi a las pocas semanas del golpe y la Revolución Libertadora adoptó un tono más sinceramente anclado en sus motivaciones: erradicar al peronismo como movimiento político, borrar su memoria histórica, deshacer su legado para recién ahí reorganizar al país sobre nuevas bases. La historia corta se resume en que el exterminio del peronismo, por cierto, no funcionó. Vistos retrospectivamente, los sucesivos fracasos en el intento de extinguirlo produjeron el conocimiento y la experiencia que alimentaron a la dictadura militar de 1976 como el experimento más violento de la violenta historia del antipopulismo argentino.

1955-1958. Que estallen las diez mil flores del antiperonismo

Para desperonizar, Aramburu no se limitó a la violencia, sino que recurrió a la producción de un consenso controlado sobre una Argentina nueva. Mientras el gobierno proscribía al peronismo, reprimía a los sindicatos, revisaba los mecanismos de negociación salarial y controlaba el disenso interno dentro de las Fuerzas Armadas, la Junta Consultiva reunía a una amplia gama de partidos políticos para pensar una nueva organización política nacional. A la hora de recolectar ideas sobre un futuro sin Perón, Aramburu convocó, entre otros, nada menos que al mismísimo Germani. Una década después del final de la guerra, las metáforas sobre el nazismo seguían dándole forma a la mirada política nacional. Solo eso explicaba que el “fascismo antifascista” que inspiraba a las Fuerzas Armadas pudiera acercarse al pensamiento científico de Germani, que abrevaba en corrientes teóricas muy distintas. La lucha contra el totalitarismo, expresión que seguía fascinando a la *intelligentsia* global, era un paraguas tan amplio como informe. Si lo que había seguido a la derrota de Hitler había sido la “desnazificación” de Alemania, pues algo similar debía ocurrir en la Argentina. Prohibir la pronunciación de la palabra “Perón”. Descubrir con regularidad el costado moralmente revulsivo de la década pasada. Mirar hacia adelante sin dejar por un segundo de producir temor por lo que se había dejado atrás.

Para la Revolución Libertadora había pocas dudas sobre la obligación de trabajar en la erradicación y la necesidad de retornar en el menor tiempo posible a una democracia política sin peronismo. Ambos mandatos iban unidos. Lonardi exploró alguna forma de acercamiento a los resabios del peronismo sin Perón; duró seis semanas. El gobierno de Aramburu no fue ambivalente. Deshacer el tramado del poder sindical, correr al peronismo de la conducción de los sindicatos y de cualquier forma de poder estatal, reformar el sistema electoral para impedir su resurgimiento, proscribir al peronismo no solo del sistema político, sino de la esfera pública. Las iniciativas dejaban pocas dudas acerca de cuál era la interpretación dominante sobre el peronismo.

La lectura más influyente sobre los orígenes del peronismo es, sin dudas, la de Germani. En 1955, había sido convocado para crear la carrera de Sociología de la UBA de la mano de José Luis Romero, ahora interventor de la universidad. Mientras la dirigencia política canalizaba su apoyo a la dictadura a través de la Junta Consultiva, profesionales e intelectuales lo hacían desde el flamante acceso al poder del que ahora podían disfrutar. Desde ahí señalaban, también, sus especificidades. Romero, por ejemplo, aprovechaba una reedición de su viejo texto sobre la Argentina aluvial para subrayar que, para bien o para mal, el peronismo era un hecho nacional destinado a perdurar y que, por lo tanto, el imaginario desperonizante inspirado en la experiencia nazi tenía serias limitaciones. A Germani, el antiperonismo lo había llevado a acercarse al gobierno de Aramburu, convencido de que

estaba aportando a la causa contra el totalitarismo. Pero la idea dominante en el nuevo gobierno de que esa causa se asentaría sobre todo en la simple erradicación de un hecho político de la esfera pública lo alejaba definitivamente del pensamiento de la Revolución Libertadora.

Germani produce por entonces sus ideas fundamentales sobre qué era el peronismo. En una serie de artículos que publica entre 1955 y 1957, el sociólogo oscila entre describir al peronismo como una forma de fascismo, autoritarismo o totalitarismo, términos que quedarán plasmados de forma un tanto confusa cuando estos textos tomen la forma de libro en 1962. Sus ideas emergían de un análisis minucioso y teóricamente sofisticado de cifras de censos sobre población, origen social, ingresos y educación. El estudio social atado al análisis de datos estadísticos era un campo de vanguardia en la sociología de entonces. Durante las siguientes dos décadas, Germani compartió estas reflexiones con colegas del resto del mundo, sobre todo de los Estados Unidos. Sobre esa base no solo trajo a la Argentina las primeras traducciones al español de los principales textos de la sociología funcionalista, sino que también impuso al peronismo en el centro de los debates sobre el totalitarismo durante la Guerra Fría, lo que contribuyó a formar un verdadero campo transnacional sobre los estudios del populismo.

En 1955, Germani aún no utilizaba ese término. En tensión con ideas como las de la intelectualidad de derecha, usaba la noción de totalitarismo para ver qué era lo que diferenciaba al peronismo del fascismo. En esos estudios inmediatamente posteriores a la caída de Perón, lo primero que resaltaba era que la base social era muy distinta y hasta opuesta a la del fascismo italiano. Mientras que en Europa el fascismo se había afianzado en las clases medias, con simpatías entre las élites, en la Argentina, esas “masas disponibles” sin una pertenencia virtuosa en la sociedad industrial habían sido los obreros. Ahí aparece la idea del populismo como un totalitarismo de clase trabajadora. Pero, además, Germani desmentía que el peronismo hubiera sido solo un engaño para los trabajadores: la tesis del “plato de lentejas” según la cual los obreros habían vendido su libertad “al dictador” debía ser rechazada. Sí, “el dictador” hacía demagogia, argumentaba el sociólogo, pero dada la explotación económica y la falta de democracia precedente, lo que los trabajadores habían encontrado en el peronismo era una combinación de mejoras económicas, más y nuevos derechos, y una comprensión cabal del poder que un obrero podía tener si actuaba colectivamente organizado en sindicatos y liderado por Perón. Finalmente, si bien adhería fervientemente a la idea de “desperonizar la Argentina”, Germani creía que no se trataba solo de prohibir el nombre de Perón sino, sobre todo, de ofrecer a los trabajadores otra forma de obtener aquello que habían logrado con el peronismo. Esa idea, claramente, no estaba en la mente de los conservadores, de Aramburu o de los sectores del campo y la industria que apoyaban la Revolución Libertadora. Y eso ayuda a explicar por qué su vínculo con el gobierno fue mayormente infructuoso.

En esta misma época aparece lo que probablemente sea la primera identificación inequívoca entre peronismo y populismo. Lo más curioso es que esta asociación explícita no vino de parte de Germani, ni de las ciencias sociales, ni de los sectores políticos y sociales que aborrecían al populismo aun antes de saber que se llamaba de esa manera. Esta exaltación original del populismo provino de la dirigencia peronista del interior del país en 1957, cuando el catamarqueño Vicente Leónidas Saadi empezó a publicar el periódico *Populista* con la dirección de Fermín Chávez. El periódico, del que se hicieron nueve números durante 1957, rescataba por entre los pliegues de la censura las noticias sobre la reorganización del peronismo. Más que eso, sus directores abrazaban cabalmente el nombre que le habían puesto, como forma de expresión de aquellos que habían vuelto al tiempo previo a 1945, a un lugar inferior en una estructura social que se proponía jerárquica y normativa en la que los de arriba gritaban y los de abajo obedecían. La consigna bajo el nombre del periódico era elocuente de este sentimiento que no rescataba solo las conquistas sociales o “el plato de lentejas”, sino el desafío a las subordinaciones del pasado: “Venimos a hacer porque estamos cansados de oír”.

Así, el término “populismo” hacía su ingreso pausado al lenguaje político argentino. Saadi también se había proclamado fundador del Partido Populista, al que imaginaba como posible heredero del peronismo. El primer número, del 17 de mayo de 1957, lo hacía explícito en letra de molde: “**¡Populista!: El Partido Del Pueblo Descamizado**”. Bajo la proclama, el título de la nota era “Defendamos la justicia social contra las minorías en el poder”, y allí se criticaba por igual a la dictadura, a Balbín y a Nicolás Repetto. Pero sin duda, el blanco preferido de Saadi y Chávez era la Revolución Libertadora. “Aramburu es el fraude. Y pretende ser la dictadura” era el título de la segunda edición, reflejando el espíritu de *Populista*. Con todo, la cobertura estaba dedicada por partes iguales a criticar a la dictadura y a informar sobre la intensa actividad sindical y los conflictos en las fábricas que sacudían la legitimidad del régimen desde abajo. La retórica recogía la narrativa histórica del peronismo, al preguntarse si la Revolución Libertadora había hecho volver al país a 1942 (cuando se trataba de criticar la represión política) o a 1906 (cuando se deploraba su política económica). “Otra vez: Braden o los descamisados”,

decía la primera página de *Populista* en otra de sus ediciones, y criticaba la presencia del “imperialismo” en la política doméstica del país. Y yendo aún más atrás, recordaba los fusilamientos de José León Suárez contra simpatizantes peronistas ocurridos en junio de 1956 invirtiendo el imaginario liberal del siglo XIX. La nota condenaba “aquel orgiástico festival de sangre” bajo un título sarmientino: “Bárbaros, bárbaros”.

El antiperonismo se repensaba a sí mismo a paso acelerado. En 1956, Ernesto Sabato publica un texto en respuesta a Amadeo, en el que reconoce que su odio atávico al peronismo le había impedido ver las confrontaciones complejas que explicaban su surgimiento. Una frase memorable sintetizaba su argumento y concentraba en una oración lo que a otros les llevaría varios libros explicar: “Aquella noche de setiembre de 1955, mientras los doctores, hacendados y escritores festejábamos ruidosamente en la sala la caída del tirano, en un rincón de la antecocina vi cómo las dos indias que allí trabajaban tenían los ojos empapados de lágrimas”.

La versatilidad de Sabato para entender lo que había ocurrido y retroceder algo sobre sus pasos no era compartida por muchos de sus colegas. La intelectualidad antiperonista argentina, con Jorge Luis Borges a la cabeza, fue de los sectores que más firmemente se mantuvo en las convicciones y razones que forjó desde 1943. Pero las palabras de Sabato sí llegaban a los oídos de las clases medias y de sectores políticos que, al mismo tiempo que apoyaban el golpe, empezaban a imaginar cómo instaurar una nueva democracia.

Otros, no menos lúcidos y mucho más influyentes, seguían anclados en el antiperonismo fraguado durante la década anterior. El “Informe preliminar acerca de la situación económica” que Prebisch elaboró para el gobierno pocas semanas después del golpe reforzaba viejos argumentos críticos de las formas de intervención del Estado en la economía y del aislamiento del país que habían llevado a “la crisis más aguda de su desarrollo económico”. En aquel informe, Prebisch, que para entonces llevaba un lustro como director de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), modificó algunas de sus prioridades. Solicitado por Lonardi, el informe fue redactado junto con sus colaboradores sobre la base de datos que luego el propio Prebisch puso en duda y en parte sirvió como plataforma para la política económica de Aramburu.

Aún seguía en el centro su preocupación sobre cómo financiar el desarrollo industrial en un país dependiente de la renta agraria y condicionado por la baja tasa de ahorro. Pero ahora, para resolver ese cuello de botella, Prebisch estaba dispuesto a postergar en el tiempo la idea del “bienestar de las masas” que estaba en el centro de su trabajo de 1949. El economista responsabilizaba de la inflación a los aumentos salariales dictados por el peronismo, criticaba las múltiples regulaciones económicas y proponía una fuerte devaluación para recuperar la competitividad externa. El gobierno congeló los salarios, abandonó el sistema de cambios múltiples y devaluó el peso un 50% en tres meses. La devaluación —que en los hechos implicaba una transferencia regresiva de los ingresos de los asalariados hacia el sector agrario exportador— era vista como una medida que en el tiempo se corregiría a sí misma, pero no debía trasladarse a los salarios ya que esto “alentaría nuevamente la espiral de costos y precios”. Pero la plataforma necesaria para la industrialización no vendría solo del campo. Prebisch creía ahora que el ingreso al Banco Interamericano de Desarrollo y al Fondo Monetario Internacional (FMI), algo que el propio Perón había buscado secreta e infructuosamente, conformaban la otra pata para la capitalización que necesitaba el país. El gobierno aceleró las gestiones con el FMI —que con Perón fuera del poder se mostraba flexible y dispuesto a tolerar irregularidades iguales o peores que las que había señalado apenas un año atrás— y concretó su integración al organismo en agosto de 1956.

Esas mismas tensiones económicas y políticas sobre cómo debía ser una Argentina sin Perón atravesaron y fracturaron al socialismo y a la UCR. Los socialistas, esa “izquierda liberal” en la mirada de Amadeo, vivieron en 1958 la primera de una serie de fracturas, cuando un grupo de jóvenes (entre los que se encontraba mi padre, Elias Semán) fundó el Partido Socialista Argentino (PSA), dejando el Partido Socialista Democrático para Repetto y Ghioldi, quien corporizaba una forma de antipopulismo tan opuesta a la de los jóvenes socialistas que el año anterior había estrenado un sobrenombre elocuente, “Norteamérico Ghioldi”, cuando un semanario lo describió en estos términos: “Norteamérico es lo más fino en la casa. Fue especialista en bombitas y solo lleva masitas (nunca pudo con las masas...)”.

El PSA adelantaba los argumentos antiimperialistas que se harían norma al año siguiente tras la Revolución Cubana. Bajo la preocupación antiimperialista, el grupo se radicalizaría progresivamente, fracturando en el camino al socialismo en partes cada vez más pequeñas. En 1958, uno de los fundamentos de ese corrimiento a la izquierda era la crítica a Ghioldi y a la oficialidad del partido por su obstinada incapacidad para entender qué había significado el peronismo para la clase trabajadora, a la que el socialismo había perdido entre 1943 y 1945 para no recuperarla. Las diferencias se habían hecho públicas desde 1955, cuando las publicaciones de las Juventudes Socialistas condenaban el espíritu revanchista de la Revolución Libertadora. Desde el PSA, esta gene-

ración iba a tomar distancia simultáneamente del antiperonismo y del anticomunismo del viejo socialismo, para acercarse al mismo tiempo a una mirada distinta de la “cuestión nacional” y de la identidad latinoamericana. Esto último tuvo una importancia crucial al año siguiente, cuando La Habana se convirtió en el foco de toda la región. Pero en la Argentina el signo de origen de esa nueva izquierda socialista no había sido el entusiasmo revolucionario con Cuba, sino la posibilidad de encarar una relación teórica y política nueva entre socialismo y peronismo, en la que la idea de superarlo desplazaba a la de combatirlo.

Las visiones contrapuestas sobre el peronismo hacia adentro de la UCR fueron las que tuvieron más consecuencias inmediatas para el país. El sector de la UCR Intransigente, liderado por Arturo Frondizi, seguía reivindicando aquel Programa de Avellaneda de 1945, que rechazaba el ascenso de Perón pero disputaba sus banderas (e incluso iba, como en el caso de la reforma agraria, más allá del peronismo). Esa era una de las fricciones centrales con el almirante Isaac Rojas, jefe de la Junta Consultiva, a quien le reclamaban un inmediato llamado a elecciones. Balbín, al frente de la UCR del Pueblo, se mostraba más dispuesto a seguir los tiempos marcados por el gobierno. La fractura entre la UCRI y la UCRP para las elecciones de constituyentes de 1957 —en la que el peronismo estuvo proscripto— precipitó la primera gran fractura partidaria. Tras dos años de “desperonización” el país permanecía, mayormente, peronista. La represión había sido eficiente en evitar un retorno del peronismo al poder. Eso no iba a suceder por mucho tiempo. Pero los sindicatos habían reacomodado sus estrategias de negociación, y como para confirmar que el peronismo no era el nazismo, la enorme estructura política y estatal creada desde 1945 no se había sentido enteramente liberada por la caída del tirano, ni había pisoteado con entusiasmo y autonomía la simbología del régimen, sino que en muchos casos añoraba la gesta de la que había sido parte. Las reformas electorales, la proscripción y la remoción de los dirigentes sindicales peronistas habían tenido efecto relativo: en ese contexto represivo, en 1957 un cuarto de los votantes siguió la orden de Perón de votar en blanco para la elección de constituyentes.

Frondizi fue el primero en darse cuenta de que “el hecho peronista” había llegado para quedarse. La UCRI llegó a la Convención Constituyente, denunció su ilegalidad y se retiró. La UCRP, en cambio, convalidó la derogación de la Constitución de 1949 y el marco legal que imponía la nueva Carta Magna. Esa división fue irreversible y le dio a la UCRI la posibilidad de explorar un camino antes impensado: el acercamiento al peronismo.

La decisión de Frondizi de negociar un acuerdo con Perón para recibir los votos peronistas en las elecciones presidenciales del año siguiente tenía al menos dos motores. Uno, obvio, era la comprensión cabal de que sin el apoyo peronista sería muy difícil ganar las elecciones e imposible gobernar. Frondizi supo desde 1957 que no podría llegar al poder reemplazando al peronismo ni heredando a su líder, sino que debía adaptarse a la realidad de tratar encabezar un movimiento ajeno. Ese reacomodamiento se explicaba también desde una suerte de misión redentora, basada en la convicción de que, si se lo reconocía como un actor político legítimo, el populismo podía expurgar al menos sus peores pecados. Muchos habían negociado con Perón en el pasado, pero nadie había ido tan lejos, mucho menos tras su derrocamiento y proscripción. Esta forma específica de antipopulismo democrático imaginaba que el populismo era un fenómeno que distorsionaba la democracia liberal y era autoritario, pero que de todos modos había sido un canal efectivo para la participación en la política de los obreros, quienes bajo el peronismo habían incrementado su poder político y mejorado su calidad de vida, mientras el país vivía una modernización masiva pero defectuosa. Económicamente, Frondizi conjeturaba que lo que le faltaba al país era desarrollo, una forma de garantizar la infraestructura industrial para dejar atrás la dependencia de un sector agrario que no podía traccionar al resto de la nación.

Pero en lo político, la UCRI era aún mucho más innovadora. Frondizi suponía que si se reconocía la legitimidad de la adhesión de los trabajadores al peronismo en vez de luchar por su erradicación, esta adhesión iría perdiendo los elementos más problemáticos. Eventualmente, podría incluso convertirse en la base política de un partido laborista y desarrollista. El reconocimiento del peronismo como un interlocutor válido y no como un virus externo al cuerpo nacional fue un acto de un atrevimiento difícil de dimensionar históricamente. De hecho, esta concepción del antipopulismo como un instrumento sanador solo volvería a repetirse más de treinta años después, cuando Raúl Alfonsín puso en marcha el Pacto de Olivos con Carlos Menem.

La negociación de la UCRI con el peronismo llevó a Frondizi a la presidencia en 1958. Pero el gambito político chocó de frente contra ese antipopulismo incommovible que reinaba desde 1955 y del cual Frondizi se había alejado. Perón le había dado su apoyo a cambio de la promesa de preservar el futuro político del sindicalismo argentino (que a su vez él imaginaba, con bastante lógica, como el instrumento para su retorno). Para el nuevo presidente, la alternativa para construir un poder propio era convertirse en el jefe de esa “burguesía nacional” que imaginaba moderna, con capacidad para integrar a las masas a una economía dinámica, y dispuesta a enten-

der la necesidad de reconocer al peronismo para apuntalar los intereses de la nación. El mayor problema era que esa burguesía, como tal, aún había que inventarla.

Fron diza llegó entonces al poder con el apoyo de un sector que no lo reconocía como líder y buscó ser líder de un sector que no existía.

El resultado fue el de un gobierno que muy pronto estuvo cercado de enemigos formidables y aliados más que cautos o directamente inexistentes. El poder efectivo de Frondizi duró poco, el del gobierno duró cuatro años, dos menos de lo que era por entonces el mandato presidencial. El ideal frondizista del desarrollo económico abrevaba tanto de la herencia peronista de una industrialización asistida como de los señalamientos de Raúl Prebisch sobre las limitaciones de esta estrategia. Bajo su mitología entraban los obreros sindicalizados –aun si el peronismo seguía proscrito–, los industriales como Di Tella –lo más parecido a la burguesía nacional que Frondizi y Rogelio Frigerio tenían en mente–, y los intelectuales y dirigentes de la izquierda que se esperanzaron con un proyecto de nación progresista que al menos no estuviera enfrentado con el movimiento obrero organizado. Todos ellos se fueron desencantando, con énfasis distintos, en los cuatro años siguientes a 1958.

1959-1966. La confrontación

En enero de 1959, Fidel Castro entró triunfal a La Habana. En ese instante, la Revolución Cubana puso al desnudo el agotamiento de los proyectos populistas y democráticos de reforma social en América Latina y su reemplazo por apuestas de transformación mucho más radicales y violentas en toda la región. En la Argentina, la Revolución Cubana desató un debate renovado sobre cómo imaginar el cambio social en un país donde había peronismo. Distintas variantes de la izquierda empezaban a discutir cómo “el hecho peronista” era no solo un obstáculo para la revolución, sino una identidad política fuertemente arraigada entre los trabajadores. Unos meses después de la toma del poder de Castro, Guevara y Cienfuegos en Cuba, Reynaldo Pastor publicaba en la Argentina su libro *Frente al totalitarismo peronista*. En él, el conservador elaboraba los términos de un antipopulismo de signo opuesto que, mientras reconocía la amenaza dominante del comunismo en el mundo, conjugaba la cruzada casi mesiánica de restaurar el viejo orden en el país como un subproducto del concepto estrella de la Guerra Fría: la lucha contra el totalitarismo. Pastor adelantaba los argumentos de un “fascismo antifascista” que se irían perfeccionando hasta culminar en la forma acabada que tendrían en la dictadura militar de 1976. En esa mirada, el comunismo y la guerrilla habían puesto el país al borde de la perdición, pero su penetración había sido posible por la crisis en las jerarquías sociales que había provocado el populismo desde su emergencia en 1916.

Desde 1955, el conservadurismo acentuaría sus rasgos reaccionarios, mientras la izquierda produciría una sucesión de fraccionamientos cada vez más radicalizados. Con algo de incomodidad, estas dos formas de antipopulismo habían convivido bajo el paraguas común de la lucha contra el peronismo. Dos formas por completo opuestas de pensar el mundo habían encontrado en “la lucha contra la tiranía” ese terreno momentáneamente común. De aquí en más serían los polos de un enfrentamiento cada vez más violento entre dos proyectos opuestos sobre qué se podía considerar una sociedad justa. En este período en el que se superponen el fracaso del gobierno de Frondizi y el triunfo de la revolución en Cuba, el cambio social separa definitivamente estas dos formas de antipopulismo; una que acentuaba que el peronismo era una amenaza a la paz social, las prácticas republicanas, la tradición nacional y la propiedad; otra que, al contrario, veía el peronismo como un obstáculo, un desvío o un socio eventual, para un ataque frontal contra esas mismas prácticas e instituciones.

Una inevitable revolución violenta

La frustración con los límites del populismo ocupó algún lugar en las biografías políticas de Castro y Guevara y en la decisión de abrazar la lucha armada. Castro había hecho una de sus primeras incursiones internacionales en 1948, con solo 21 años, tras ser contactado en la embajada argentina en La Habana por el agregado obrero, uno de los activistas sindicales designados por Perón en las representaciones diplomáticas. Con fondos y la ayuda logística del peronismo, Castro y tres militantes más viajaron a Colombia para protestar contra la presencia del

secretario de Estado norteamericano, George Marshall, durante la IX Cumbre Panamericana que dio origen a la Organización de Estados Americanos. En el camino de Cuba a Colombia, los cubanos recorrieron Venezuela y Panamá, donde se reunieron con activistas estudiantiles, sindicales y dirigentes políticos, incluida la plana mayor del gobierno venezolano liderado por el escritor Rómulo Gallegos. En Bogotá, Castro tuvo contacto con el líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, el dirigente populista en ascenso en la región, con un apoyo abrumador entre obreros y campesinos en Colombia, que iba camino a arrasarse en las elecciones presidenciales. Ahí conversaron sobre la posibilidad de un movimiento que, liderado por el peronismo, encarnara la primavera democrática desatada tras el final de la guerra y se organizara alrededor de un rechazo a la dominación creciente de los Estados Unidos en la región. Tan entusiasmado estaba con la iniciativa, que el 4 de abril, tres días antes del comienzo de la conferencia, Castro le escribió una carta a su padre, en la que comentaba: “Los argentinos nos dan el mayor apoyo posible a nuestro movimiento”. Esa alianza incipiente le permitió a Castro terminar su nota en un tono esperanzado sobre su futuro, convencido de que “después de esto, puede que me vaya a la Argentina a pasar tres meses ahí con una beca del gobierno argentino”.

El entusiasmo duró un par de días más. El asesinato de Gaitán el 8 de abril puso fin al sueño de una reforma radical en Colombia por la vía electoral y desató una ola de violencia sin precedentes. Las élites, que habían resistido a Gaitán con odio, ahora acusaban al comunismo por las protestas contra su asesinato y sobre esa base desplegaron un aparato represivo que mantuvo al país militarizado durante el medio siglo siguiente. Perón recalculó prioridades, leyó el apoyo de los Estados Unidos a la represión como un renovado ímpetu intervencionista y se sumó a las condenas al comunismo. Sin alianza reformista regional ni viaje a la Argentina peronista, Castro abandonó enseguida la esperanza en los proyectos reformistas de cambio social, una frustración que pavimentó el camino a la lucha armada.

El recorrido del Che Guevara fue análogo. En 1952, durante su segundo viaje como mochilero por América Latina, Guevara se cruzó con los efectos de la propaganda peronista en Ilave, un pueblo perdido del Perú, unos 800 kilómetros al sureste de Lima. Allí tomó nota de un “un indio que se nos acercó tímidamente con su hijo, que hablaba bien español, y empezó a preguntarnos sobre las maravillosas ‘tierras de Perón’ [...] El hombre nos pidió una copia de la Constitución argentina, con la declaración de los derechos para los ancianos”. El futuro líder tuvo ahí una primera evidencia del impacto que las políticas de reforma social argentinas tenían en el resto de la región. Años más tarde, el Che Guevara estuvo en Guatemala durante la caída del gobierno de Jacobo Arbenz, uno de los últimos intentos de cambio radical por la vía democrática en la posguerra. El experimento fue violentamente interrumpido en 1954 por el primer golpe de Estado explícitamente coordinado por la CIA. Instalado en Guatemala, Guevara participó del entusiasmo del gobierno de Arbenz y, tras el golpe, terminó refugiado en la embajada argentina junto con más de doscientos activistas de toda la región, incluidos los futuros líderes de la guerrilla guatemalteca. Como Castro en Colombia unos años antes, Guevara vivió en primera persona las limitaciones intrínsecas de los proyectos democráticos para enfrentar la dinámica de la Guerra Fría, en la que los Estados Unidos proveían razones y recursos a las élites locales para hacer aún más intransigente su posición en conflictos domésticos sobre la desigualdad y la distribución injusta de la riqueza. De Guatemala, el Che partió hacia México, donde tuvo contacto con Castro para empezar un trayecto que cambiaría la historia de la región.

La referencia al anecdotario político de los dos líderes de la Revolución Cubana no es antojadiza. Señala en las biografías personales un proceso de transformación regional más amplio y en general poco discutido. Pasados los primeros años de la primavera democrática de la posguerra, el fracaso de los proyectos populistas de reforma social es en verdad el suelo fértil, sino la razón, de la Guerra Fría en América Latina.

Tanto la fase populista más clásica del cardenismo mexicano como la reencarnación defectuosa del varguismo en Brasil y el peronismo en la Argentina estaban no solo fuera del poder, sino carentes de una visión de desarrollo económico inclusivo sustentable como el que habían imaginado en las décadas previas. Estrangulados entre el endurecimiento de las élites locales y el involucramiento de los Estados Unidos en cualquier conflicto social que pudiera ser leído como un campo propicio para el surgimiento de formas de protesta comunista, los populismos –aun aquellos marcadamente anticomunistas, como el de Argentina– perdieron eficacia política y chocaron contra las limitaciones que los economistas como Prebisch habían previsto años atrás. Preocupado por detener el potencial expansivo de Cuba en la región, los Estados Unidos lanzaron en 1961 la Alianza para el Progreso, cuya ambición de promover la mayor inversión en infraestructura en la historia de América Latina solo es comparable con su fracaso. En el primer aniversario del programa, John F. Kennedy pronunció aquella frase que no solo podía ser una reflexión sobre el conflicto social en la región y el rol de los Estados Unidos en él, sino que también era un análisis de la historia reciente y una anticipación de un futuro ominoso: “Aquellos

que hagan imposible una revolución pacífica, harán inevitable una revolución violenta”.

La revolución pacífica con la que soñaba Kennedy –más como forma de anticomunismo que como visión de la sociedad– no era tanto la de la Alianza para el Progreso de ese momento, sino la de los proyectos populistas que acababan de agotarse. Es este colapso de las vías reformistas hacia finales de los años cincuenta, esa fuerza virulenta contra el surgimiento de líderes como Gaitán a fines de los años cuarenta, esa determinación por contener y revertir las reformas sociales de posguerra, lo que dejó a una generación entera la opción de la lucha armada como una alternativa posible para afrontar los problemas históricos de la región, asociados a la desigualdad interna y la dependencia externa.

Desde el comunismo al socialismo y el nacionalismo de izquierda, la trayectoria de quienes se inspiraron en la Revolución Cubana en la Argentina se cruzaba con este proceso de forma distinta. Muchos habían estado en contra del populismo durante su apogeo, y la realidad de sus transformaciones los había forzado a un acercamiento justo cuando aquel mostraba su agotamiento terminal. En ese cruce entre la experiencia histórica y la coyuntura, Cuba se convirtió rápidamente en algo muy distinto a lo que ocurría de hecho en La Habana: un insumo más para redefinir “la cuestión nacional”.

Orden, disciplina y trabajo

Quien había entendido rápidamente que la Guerra Fría era un engranaje nuevo y poderoso de la cuestión nacional había sido Pastor. Su libro *Frente al totalitarismo peronista* no era particularmente agudo. Pero, visto en perspectiva, capturaba el clima de época en el que el comunismo desplazaba a los codazos al peronismo como preocupación central de partes de la derecha argentina. Si las diferencias en el antiperonismo se mantienen en baja intensidad desde 1945 y empiezan a estallar tras 1955, el lenguaje anticomunista de la Guerra Fría habilita en 1959 la fragmentación total del antipopulismo que pasa, como afirma Flavia Fiorucci, “de un medio dominado por el consenso y las medias palabras [...] a otro donde lo que prevalecía eran las divisiones y el debate”.

El texto de Pastor corresponde al género del pastiche, en el que una serie de características estéticas, escenas y detalles precisos lo habilitan a situar al peronismo, “el peor régimen de gobierno que hemos conocido en esta tierra” según lo define Federico Pinedo en el prólogo, como una versión empeorada del rosismo que lo emparenta con el comunismo. Un año después, el ex diputado radical Santiago Nudelman refraseaba argumentos similares en *El régimen totalitario*. Pero si el peronismo había adoptado rituales del nazismo y del estalinismo en sus políticas públicas y sus liturgias funerarias, Pastor no los tomaba como mera decepción, sino que los utilizaba para refundar la noción decadentista de la Argentina. El libro retomaba el año 1945 como un momento de quiebre que había dejado atrás un pasado argentino caracterizado por una “maravillosa y equilibrada síntesis del progreso científico, cultural, político, económico e institucional” En ese imaginario, las chances de incorporar algunas de las transformaciones realizadas durante el peronismo eran claramente escasas. Pero al mismo tiempo, la presencia creciente de la retórica anticomunista habilitaba a imaginar alguna forma de convivencia con un peronismo que, al fin y al cabo, también sabía de imponer autoridad y disciplina. Esa convivencia anticomunista con el peronismo iba a convertirse en un horizonte en el imaginario de la derecha antipopulista que siempre se desplazaba un poco más allá, pero precisamente por eso, nunca terminaba de morir. Es ahí donde el argumento antitotalitario se mordía la cola y requería del totalitarismo para vencer al totalitarismo para, por fin, alcanzar la libertad.

Nada describía mejor esa ilusión contradictoria del antipopulismo que el capítulo VI del libro de Pastor, vanguardísticamente compuesto de solo tres palabras que abrigan la curiosa esperanza de una síntesis superior: “Orden, disciplina, trabajo”.

Una de las mejores expresiones de esa tensión dentro de la derecha antipopulista fue la creación de Unión del Pueblo Argentino (Udelpa), el partido con el que Aramburu imaginó culminar por la vía electoral lo que había comenzado como presidente de la Revolución Libertadora. La importancia histórica de Udelpa es mucho mayor que el impacto político que tuvo en su momento. Si Patrón Costas en 1943 inició el largo período de una élite electoralmente incapaz de triunfar, Udelpa fue el primer intento de la derecha antipopulista por retomar la vía democrática tras el golpe de 1955. Es un retorno matizado por la proscripción al peronismo que el propio Aramburu había impuesto antes, pero también es un punto de partida de dos escenas fundamentales del antipopulis-

mo: la de la frustración y la de la esperanza. La de la frustración alimentó el núcleo del discurso político de la dictadura militar argentina. La escena de la esperanza se mantuvo como un espejismo en el desierto durante cincuenta y tres años. Así, ver el paso anecdótico de Udelpa no es tanto un regodeo por los márgenes, sino el rastreo de ilusiones que con el tiempo se convirtieron en sentido común de millones de personas y, por fin, de una mayoría electoral.

Udelpa, obviamente, no ganó las elecciones presidenciales de 1963, pero el 7,5% de votos que obtuvo la fórmula Aramburu-Thedy galvanizó el espacio conservador y militarista alrededor de una alternativa electoral. Para el antipopulismo de derecha, la idea del personalismo demagogo era una droga de la que no podía escapar. Aramburu, que personificaba el golpe contra un movimiento descrito como paternalista y demagogo, buscaba ahora un liderazgo que sus publicistas describían como “una figura paterna para captar a la clase media democrática”. Se acercaban así a encajar en la descripción del fascismo que ellos aborrecían: según Germani, una diferencia crucial entre Mussolini y Perón era que el primero se había convertido en una figura paterna para clases medias en crisis, mientras que el segundo era el padre buscado para clases bajas en ascenso.

La droga del paternalismo llevaba a la otra adicción, tanto más poderosa: la de los votos. Por un instante, agrupaciones de derecha de Buenos Aires y del interior imaginaron un futuro electoralmente exitoso que en verdad solo llegarían a realizar medio siglo después. Algunos de los que habían apoyado a la UCRP tras la promesa de Balbín de que no admitiría el retorno político del peronismo ahora podían fantasear con su propio partido. Illia había triunfado con el 25% de los votos, adelante del 19% de votos en blanco ordenados por Perón. El resultado revelaba que había varias realidades superpuestas. Una de ellas, ineludible, era que ocho años después del golpe y tras toda la represión volcada sobre sus símbolos y organizaciones el peronismo seguía siendo una fuerza gravitante en la política argentina. Pero también era cierto que el radicalismo había logrado un resultado que podía ser esperanzador. Aun contabilizando los votos en blanco, la Illia y la UCRI de Oscar Alende tenían más del 40% de los votos. Perón, al mismo tiempo, parecía incapaz de encontrar el camino de un retorno triunfal, y esa decepción comenzaba a permear partes de la estructura sindical. La idea de una Argentina sin Perón podía ser verosímil para amplios sectores de la clase media y, en mucha menor medida, para los trabajadores industriales. El panorama podía indicar que el esfuerzo desperonizador había sido en vano o que la tarea aún estaba pendiente. Aramburu, seducido por la ilusión irresistible de una victoria electoral, se balanceó entre las dos posibilidades. A comienzos de 1963 y a contracorriente de su base política más firme, Aramburu se animaba a la síntesis histórica inimaginable:

Nuestro pensamiento político superior debe consistir en lograr la unión de lo valedero y permanente del peronismo con lo positivo de la Revolución Libertadora.

Fue una apertura breve. En septiembre de 1964, después de haber comprobado los alcances y estrecheces de la derecha conservadora, Aramburu, finalmente, declaraba: “Este es un partido antiperonista”.

Hacia adentro del ejército (un interlocutor privilegiado de la derecha antipopulista mucho más allá de su peso electoral), el enfrentamiento entre azules y colorados presentaba otra cara de las tensiones acerca de cómo enfrentar al peronismo.

Aunque ambos sectores eran definitivamente antiperonistas, los colorados eran tajantes en cuanto a mantener proscrito el peronismo. Los azules imaginaban que una apertura controlada podía ser una estrategia más efectiva para contener sus efectos nocivos. Fueron los más inflexibles quienes pergeñaron el golpe contra el gobierno conciliador de Frondizi en 1962 y continuaron con la sublevación en 1963. Los colorados fueron reprimidos pero la sublevación derivó en la remoción de Frondizi y el reemplazo por su vice, José María Guido, hasta el triunfo de Illia al año siguiente. El liderazgo del grupo azul contra los sublevados colorados había quedado en manos de Juan Carlos Onganía, quien pocos años después lideraría un intento renovado y modernizador por dejar atrás al peronismo.

Interruptus

Las razones por las que la eliminación del peronismo era una condición previa al restablecimiento democrático adquirirían legitimidad en la teoría social a nivel internacional. Y esta, a su vez, encontraba en el peronismo un contraste frente a formas más virtuosas de la democracia de masas. Lipset, aquel que había recibido a Di Tella

en su despacho en la Universidad de Columbia, publicó *Political Man* en 1960. Allí, el sociólogo estudiaba la forma en la que obreros, campesinos y pobres se habían incorporado a la política durante el siglo XX. Por esos años, la ansiedad por el fascismo se opacaba en la medida en que el comunismo crecía en el horizonte de preocupaciones. El concepto de “totalitarismo” facilitaba esa transición bajo el vector común del problema de las masas en las sociedades industriales. La psicología de las masas, la educación, las restricciones económicas o la violencia doméstica –todas ideas discutidas a principios de siglo en los estudios sobre la multitud de hombres que ya mencionamos, como los de Le Bon y Ramos Mejía– explicaban los desvíos de la norma. Pero el objeto que querían analizar parecía intrínsecamente inestable, y las categorías eran siempre una sábana corta: el peronismo era fascista *pero* con apoyo obrero, de clase baja *pero* anticomunista, comunista *pero* fascista. Cada idea parecía un atrapasueños imperfecto que no terminaba de capturar la naturaleza del fenómeno. Durante una década, Lipset y sus colegas en los Estados Unidos y América Latina se convirtieron en una verdadera máquina loca que propalaba un concepto nuevo cada día para describir las amenazas que la conducta política de las masas presentaba a la democracia liberal. En una clasificación global, Lipset afirmaba que, en el mundo, “el autoritarismo de la clase trabajadora es comunista, y en menor medida, peronismo”. El peronismo fue el blanco dilecto de esa obsesión, con una variedad de categorías que incluyeron, entre otras, “izquierda extremista”, “fascismo de izquierda”, “autoritarismo de clase trabajadora”, “fascismo de clase baja” e incluso el más abarcativo y fundamental, “nacionalismo populista anticapitalista que atrae a los estratos bajos así como al ejército”.

Así fue como, por fin, en esa carrera histórica por definir eso que representaba el peronismo apareció el término “populismo”. Lipset lo introdujo en las tres páginas que le dedicó al peronismo en *Political Man*, que se publicaría en español tres años más tarde. Germani, en cambio, seguirá hasta finales de la década prefiriendo hablar de un movimiento “nacional popular”, que había sido su forma de precisar la especificidad del peronismo y lo que lo separaba del fascismo. Para los años sesenta, el populismo a secas, sin todas las especificaciones que le agregaba Lipset, era algo un poco más preciso. Era distinto al fascismo por un lado, pero también distinto al populismo norteamericano de fines del siglo XIX, de donde provenía el concepto. De aquel populismo conservaba el discurso de una confrontación binaria entre el pueblo y las élites, pero ya no tenía nada que ver con sociedades mayormente rurales que denunciaban al mundo de las finanzas. En la formulación proteica del peronismo, el populismo latinoamericano caracterizaba la tendencia autoritaria con la que las clases bajas se integraban a la política en sociedades industriales en las que la transición de las masas de la tradición a la modernidad se había producido alborotadamente. Esto las había dejado disponibles para el paternalismo protector de un demagogo, al que apoyaban en su despotismo a cambio de beneficios reales y simbólicos, pero a costa de una idea de libertad y democracia para todos.

Junto con la definición específica de populismo, el otro elemento que quedaba inscripto desde el comienzo era su condición de problema. Para quienes lo analizaban, el populismo representó desde entonces una traba, un obstáculo. Para la historia argentina, la presencia del peronismo era un problema, pero el tipo de problema que representaba iba a ser diferente para cada uno y a lo largo del tiempo. En ese amplio espectro de rechazos germinan dos formas distintas de antipopulismo. Uno de esos rechazos veía el populismo como una forma de movilización radicalizada que impedía preservar el orden social; la otra veía en el populismo una forma conciliadora de liderar a los trabajadores que obstaculizaba una transformación sustantiva de ese orden social que aquellos otros buscaban preservar. El antipopulismo, con sus matices más diversos, había llegado para quedarse.

Antipopulismo de izquierda y latinoamericanista

El cambio en la forma en la que la izquierda miraba al peronismo fue tan importante como la Revolución Cubana. Y en muchos sentidos lo primero preparó el terreno para leer la segunda no solo como una revolución socialista, sino como un movimiento nacionalista antiimperialista. Era algo distinto a una simple reconciliación con el peronismo. En algunos casos, la figura de John William Cooke acercó a muchos dirigentes y militantes de izquierda al peronismo a través del Caribe. Fidel Castro representaba ahí el Perón que muchos peronistas querían que fuera. Pero más importante, la revolución le demostraba a la izquierda antifascista que, en América Latina, la “cuestión nacional” no era solo un engaño, sino el punto de partida de una conciencia antiimperialista. En octubre de 1960, mi padre, Elías Semán, integró uno de los primeros contingentes internacionales que hizo el peregrinaje a La Habana de Castro y Guevara. A su regreso publicó *Cuba miliciana*, un texto urgente que repasaba las condiciones que habían hecho posible la gesta. Pero ese entusiasmo llevaba circularmente a la Argenti-

na. El libro finalizaba ratificando la esperanza del autor en “la unidad de las fuerzas populares. Esta unidad requiere la presencia del peronismo, a través del cual se expresa la vitalidad de las masas argentinas con la jerarquía de un gran movimiento nacional”.

Esa mirada esperanzada sobre el peronismo deja su huella más allá de las fracciones del socialismo. El encuentro imaginario entre Cuba y el peronismo habría de alimentar la fantasía (y las arcas) de una guerrilla nacional, a contramano incluso del propio Perón, que para 1959 estaba refugiado en República Dominicana como huésped de Trujillo, cuando llegó Fulgencio Batista como su nuevo compañero de exilio. Pero en la izquierda socialista, el desencanto con el peronismo convivió siempre con el entusiasmo. En abril de 1965, el socialismo vivía un fraccionamiento más hacia la izquierda. Una parte del Partido Socialista Argentino de Vanguardia decidió fundar Vanguardia Comunista (VC), el primer partido maoísta de la Argentina. El grupo controlaba el periódico partidario *No Transar*, dirigido por Semán. En el número 42, el de su flamante reencarnación, *No Transar* refleja las coordenadas de su nueva identidad política, entre el internacionalismo imperante y la cuestión nacional más permanente. El título catástrofe de su primera página es “Fuera Yanquis Asesinos de Vietnam”. La nota con la que termina se llama “El fracaso del populismo”, un análisis de las limitaciones burguesas que el peronismo había mostrado en las elecciones legislativas del mes anterior para liderar a los trabajadores. El estancamiento del peronismo, decía, “demuestra la incorrección de la tesis movimientista”, en la que los obreros conviven con otras clases sociales, y reafirma la necesidad de que “la lucha francamente antiburocrática” y anti-imperialista de la base peronista sea liderada “por el marxismo leninismo”. Ya no había en aquellas palabras la ira antifascista que había llevado a muchos de ellos a formar los comandos civiles una década atrás. Pero tampoco estaban marcadas por el espíritu de reencuentro de 1960.

¿Qué había pasado en el medio? Cinco cosas habían sucedido para que la izquierda desplegara entonces una nueva perspectiva crítica sobre el populismo. Una era el entusiasmo inicial con la revolución, que llevó luego a algunos al intento de replicar el foquismo para acelerar y profundizar los cambios. Otra fue el entusiasmo con el maoísmo: en sus viajes a Cuba, Semán y su grupo tuvieron la oportunidad de pelearse sucesivamente con el Che, con la impronta de Castro, con las ambiciones regionales de Cuba y con las planetarias de la Unión Soviética. Superador del populismo en sus formas básicas, el maoísmo les ofrecía el camino de una construcción de masas y de un reencuentro con la cuestión nacional que al mismo tiempo desafiaba la estructura burguesa sobre la que se montaba esa nación.

Un tercer elemento fue el surgimiento en la Argentina de *Pasado y Presente*. Un grupo de jóvenes díscolos que habían sido cobijados por Héctor P. Agosti dentro del Partido Comunista desde mediados de los años cincuenta fueron finalmente expulsados y, con José Aricó y Juan Carlos Portantiero a la cabeza, fundaron una publicación que sería la referencia necesaria para la Nueva Izquierda en el medio siglo siguiente. Las traducciones de Gramsci, pero también las revisiones del marxismo en América Latina y Europa, forjaron una idea de cambio social distante de la violencia política y con tonos de un socialismo democrático que en la Argentina solo había existido desde 1945 como máscara para el antiperonismo. Las relecturas del peronismo distanciaron a los intelectuales de *Pasado y Presente* de la interpretación clásica de la conciencia de clase como un derivado necesario de las condiciones de producción que el populismo venía a encastrar. Si VC retomaba la cuestión nacional a través de una reinterpretación del marxismo-leninismo, *Pasado y Presente* lo hacía desde el rechazo. Así, comenzaron a reincorporar al repertorio revolucionario la convicción de que si la izquierda quería recuperar un lugar en el cambio social en la Argentina debía relacionarse con el legado de organización obrera y la visión de la sociedad que dejaba el peronismo, con las elecciones y hasta con los partidos tradicionales. Era un punto de encuentro (no el primero) del socialismo con el liberalismo político, que produjo un formato de antipopulismo democrático que florecería con más vigor dos décadas más tarde alrededor de la figura de Alfonsín.

Un cuarto elemento novedoso de esa primera mitad de los años sesenta fue la percepción de que, efectivamente, la Argentina había empezado un lento desmantelamiento de los legados igualitarios del peronismo. La proscripción había permitido el reacomodamiento de los sectores sindicales más dispuestos a negociar. Los salarios parecían estancados y ni el agro, ni el financiamiento internacional, ni la apuesta norteamericana por la infraestructura económica como antídoto contra el comunismo parecían suficientes para generar siquiera la ilusión de la movilidad social ascendente más allá de las clases medias.

Finalmente, un quinto elemento asociado y que explica las transformaciones en la izquierda fue, justamente, la presencia alicaída del peronismo y la percepción, por primera vez desde 1945, de que había posibilidades de recoger el legado más combativo del populismo para desplazar al peronismo del liderazgo de la clase obrera. El peronismo, proscripito y todo, seguía siendo una presencia formidable, sobre todo ante el debilitamiento progre-

sivo del gobierno de Illia. Pero el peronismo que emergía podía ser caricaturizado como una versión de los elementos más conciliadores del proyecto populista. La elección de 1965 es la última en la historia argentina que se realiza con el peronismo proscripto. El *neoperonismo* de la Unión Popular se impone bajo la conducción de Augusto Vandor, muy lejos del ideal revolucionario que la izquierda había imaginado en el peronismo apenas unos años atrás con sus acercamientos a Cooke.

El peronismo, entonces, seguía estando en el centro (en ambos sentidos), pero al mismo tiempo también aparecía como incapaz de imponer un destino a la política nacional. Mirando hacia atrás desde mediados de los años sesenta, la percepción podía ser la de un *impasse* en el que Perón no lograba recuperar las riendas de su movimiento y entre los trabajadores surgía un espacio político fragmentado pero disponible para ser liderado por otros.

Algunos de estos supuestos se iban a reafirmar y otros a descartar desde 1966. Ese año, la Revolución Argentina de Juan Carlos Onganía puso en marcha el primer intento de borrar simultáneamente la herencia desestabilizante del populismo y el ascenso internacional de la violencia política de izquierda. Esta nueva apuesta militar tenía una confianza férrea en la creación de una burocracia pública moderna y violentamente eficiente que lograra al mismo tiempo proveer y disciplinar. No sería el último intento.

1966-1976. El país moderno

Para esa gesta regeneradora, lo que Onganía necesitaba era, sobre todo, tiempo. Con entusiasmo relativo, los golpes de 1930 y 1955 se habían concebido a sí mismos como instrumentos temporarios para corregir desajustes provocados por la política de masas que los precedían y para restablecer alguna forma de democracia liberal en el corto plazo. Onganía, en cambio, presentó a la Revolución Argentina como un gesto refundacional que tenía por delante una tarea que, si no era infinita, era de muy largo alcance. La nueva dictadura se proponía reorganizar la economía, la sociedad y el Estado.

¿Qué era lo que había que reorganizar que llevaría tanto tiempo? El peronismo había prácticamente eliminado la presencia de la izquierda entre los trabajadores desde 1945, pero ese paliativo contra la radicalización obrera vino con una doble venganza que en 1966 estaba a punto de explotar. Por un lado, la solución peronista contra la izquierda había traído su propia versión de conflicto social, con su desafío plebeyo a la autoridad, el espíritu colectivo igualitario y un Estado embebido de estos valores. Y, por otro lado, ese caldo revoltoso del peronismo terminaba por convertirse en el ingrediente telúrico ideal para el fortalecimiento de una izquierda mucho más radicalizada que lo que hubiera visto antes la Argentina, alimentada por la esperanza que (y el discurso y los recursos de) la Revolución Cubana ponía en la violencia política como herramienta de cambio. Así, el desplazamiento del peronismo del centro de las preocupaciones de las élites venía acompañado, paradójicamente, de un sustrato revoltoso que remitía a este de manera inevitable.

Como en los golpes anteriores, la restauración de la democracia seguía siendo una promesa, pero ahora esta promesa se situaba en un horizonte lejano e impreciso, y eso tenía que ver, sobre todo, con la certeza de que los cambios necesarios iban mucho más allá de una proscripción aquí o un ajuste institucional más allá. La Revolución Argentina fue la primera en la que los plazos quedaban subordinados a una regeneración profunda de la nación cuya duración no podía anticiparse.

Pasados dos años del golpe, Onganía aún proclamaba, en una entrevista con un diario peruano, que “la Argentina tiene que acostumbrarse a pensar que el régimen revolucionario puede durar diez años, porque este gobierno continuará hasta que haya terminado su tarea revolucionaria”. ¿Cuál era la tarea que permitiría volver a la democracia? Onganía suponía, con algo de razón, que los resultados económicos eran “satisfactorios”. Pero opinaba, con un trágico poder predictivo, que lo más complicado era otra cosa, “otra fase de la revolución que es, por así decirlo, verdaderamente revolucionaria:

La necesidad de modernizar el país en sus instituciones, la de hacer reformas básicas y profundas para volver al federalismo real con un Estado más funcional que dirija y controle la actividad nacional en todos sus órdenes.

Un Estado poderoso al frente de un proyecto jerárquico e industrial era algo distinto a los proyectos restauradores anteriores. Se trataba de una tarea que requería erradicar la influencia de la izquierda y borrar la herencia del

populismo. En esa nueva nación sana volverían los partidos, porque “la gente, joven especialmente, necesita expresarse políticamente”. La forma en la que se expresarían esos jóvenes sería el legado de la revolución e iba, como se intuye, mucho más allá del antipopulismo monótono anterior: “Mi gobierno es de unidad nacional. El peronismo y el antiperonismo han quedado atrás. Ahora, todos miramos hacia adelante”.

Nada de todo eso salió como Onganía pensaba, obviamente, aunque los años que empiezan en 1966 pueden leerse como la explosión trágica de esas batallas épicas que los militares azules tenían en mente. La primera parte de esa década, la Revolución Argentina propiamente dicha, ambiciosa y eterna, antes de que capitulara en la menos memorable Gran Reculada (Para Aguantar Todo Lo Posible) Argentina, terminó de hecho en 1969 con el Cordobazo. En esos tres años, la dictadura introdujo una de las ideas más cautivantes para la derecha democrática del medio siglo siguiente: la solución *apolítica* para los problemas argentinos era la creación de una tecnocracia moderna de profesionales y burócratas entrenados, que con sus méritos y sus saberes desplazarán del centro de la política los lazos emocionales, la ineficiencia, las ilusiones irracionales y los abusos de poder con los que los políticos manipulaban las esperanzas de la gente.

El Estado burocrático autoritario que Guillermo O’Donnell descifró en dos de sus mejores textos reposaba en esta esperanza en la técnica de los mejores para una trífeta improbable: correr los vínculos que obligan a los funcionarios a complacer a sus súbditos del centro de la relación entre la sociedad y el Estado y reemplazarlos por decisiones técnicas libres de esa contaminación clientelar; construir sobre esa base un Estado fuerte para que se convierta en el esqueleto de una economía indestructible que erosione así el encanto de la izquierda, y recién sobre esa base exitosa, darle un pulido nuevo a la legitimidad de las jerarquías que en la Argentina no terminaban de respetarse desde 1912. Sí, Onganía podía pasearse en carroza por la Sociedad Rural y fortalecer el aparato represivo, pero que la caricatura no nos tape el bosque. Esos elementos decoraban una concepción moderna de la política cuya realización, justamente, mostraría sus límites. Lo cual lleva a otra reflexión sobre las respuestas a los fenómenos populistas, y es la necesidad de volver a poner en cuestión la confrontación tajante entre tradición y modernidad para reconocer, con el ejemplo de Chile a la cabeza, que los proyectos modernizadores de las relaciones capitalistas de producción nutren su narrativa en los lazos tradicionales, jerárquicos y autoritarios que vienen a reemplazar, y requieren su tecnología de control social. Si Pinochet podía liderar la modernización más salvaje y acelerada de América Latina era *gracias a* y no *a pesar de* el conocido tradicionalismo de la sociedad chilena, la afección del dictador por las rancheras mexicanas y la imposición de las nociones jerárquicas de clase, género y raza más atávicas del período. La explosión social de octubre de 2019 fue una sublevación plebeya contra ese combo que nadie se atrevía a desarmar. Volviendo a la Argentina de los años sesenta, entre el viejo orden de la carroza y la frescura del país industrial hay menos distancias que las que uno imagina y muchas más necesidades mutuas que las que sus promotores reconocían.

Con el nombre que fuera, el proyecto exhibía más contradicciones que las que Onganía podía sostener. Más que en conflicto, los “liberales” y “paternalistas” del gobierno (como los denominó O’Donnell) convivían en un movimiento clásico de desplazamiento de las ambiciones más hegemónicas para darle lugar a las más despóticas. El paternalismo con el que Onganía fantaseaba quizá con un liderazgo similar al de Perón imaginaba que aquella tecnocracia, cuyo exponente más claro era Krieger Vasena, podía canalizar una especie de desarrollismo despótico, en el que la financiación externa y la apropiación de la renta agraria ayudaran a una industrialización tan acelerada que contentara a obreros y propietarios.

El sueño se quebró a meses de andar cuando los sindicatos, que habían apoyado el golpe, organizaron un paro general contra Onganía. Ahí reapareció el quiebre de una ilusión óptica que también había cautivado a la Revolución Libertadora, fruto de confiar demasiado en la teoría con la que ellos mismos justificaban su proyecto político: la cooptación de los sindicatos. La creencia de que el rasgo central del peronismo había sido la forma en la que Perón controlaba y manejaba a los sindicatos desde el Estado, dejando a trabajadores manipulables y sin agenda propia, despertaba la ilusión de que los gremios, efectivamente, podían ser aliados propios una vez que Perón fuera corrido del poder y del país. El apoyo de Vandor al golpe de Onganía no hacía más que fogonear esa fantasía. Pero la ilusión, una y otra vez, se chocaba con la realidad de que los sindicalistas eran bastante más poderosos, vivos y autónomos que lo que la teoría funcionalista suponía. Y que entendían al sujeto populista mejor que esa teoría y sabían que su poder sí dependía de cierta capacidad de responder a las demandas de sus bases con beneficios ostensibles. El progresivo alejamiento desnudaba la debilidad de Onganía, que se sintió forzado a deslizarse suavemente del paternalismo al liberalismo, designando a Krieger Vasena como ministro. Para los militares de 1955 y 1966, el consumo excesivo de su propia teoría sobre la escasa autonomía de los trabajadores reforzó al poco tiempo la frustración ante una sociedad a la que descubrían, una y otra vez, como

intratable.

Ese fue, en sí mismo, un descubrimiento fundacional:

La convicción antipopulista de que la Argentina es un país de mierda que solo merece una política de segunda marca se consolidó en los años sesenta durante el fracaso de la ambición restauradora de Onganía. Fue un cambio drástico respecto de miradas más esperanzadas de la derecha argentina que auguraban un futuro venturoso tras el necesario disciplinamiento de la sociedad. Con el fracaso de los objetivos ambiciosos de la Revolución Argentina, la frustración frente a la sociedad que tenían a sus pies dejó de ser patrimonio de las miradas decadentistas del país para convertirse en un signo distintivo de sus versiones más modernizadoras. Con el tiempo, esta percepción nutrió también a la identidad de la derecha democrática. Medio siglo después, el enojo del Pro ante la sociedad que trataba de representar y que, una vez más, no se moldeaba alrededor de los experimentos sociales que venía a proponer, abrevaba en el pesimismo liberal de la segunda mitad de los años sesenta ante una Argentina irredenta que se acercaba peligrosamente al abismo.

Ahora, lo que interesa es que esta marca de época de la segunda mitad de los años sesenta, la de la exasperación ante la inamovilidad de los hechos sociales, fue también un signo regional. En esos años los jóvenes economistas chilenos volvieron de hacer sus doctorados de la Universidad de Chicago y se sorprendieron porque Santiago parecía un caserío. De esa impresión surgió “el ladrillo”, el conjunto de ideas que le propusieron al presidente Eduardo Frei Montalva en 1968 –quien las rechazó considerando que solo una dictadura podía llevar adelante tamaño programa– y que finalmente Pinochet aceptó cinco años después y convirtió en la columna vertebral del proyecto dictatorial. 1968 también fue el año en el que los intelectuales uruguayos señalaron los límites estructurales de su bienestar excepcional y asistieron a la virulenta transnacionalización del Estado represivo contra la aparición temprana de su guerrilla urbana, los Tupamaros. Así vista, para América Latina la década terminó en 1969, cuando Mario Vargas Llosa arrancó su novela culminante con una frase que capturó para siempre la cultura del desencanto que daría forma ominosa al futuro de toda una región: “¿En qué momento se jodió el Perú, Zavalita?”.

En la Argentina, lo primero que se evaporó con el Cordobazo, en 1969, fue la idea de paz social y orden que le daba sentido al liderazgo de Onganía. La tecnocracia que había servido para dinamizar la economía urbana no era capaz de liderar a esa sociedad, quizá porque en la diferencia entre administrar y gobernar reside la clave de la política. Unos años antes, en 1964, José Luis de Imaz publica un libro fundamental de la sociología argentina, *Los que mandan*. Su trabajo de investigación es previo y abarca a muchas áreas de la vida económica y política, pero su conclusión resuena con fuerza en ese momento. Los grupos que conducen al país solo pueden mandar mediante la imposición, son incapaces de gobernar desde el esfuerzo de convencer a los gobernados de los beneficios de sus ideas para el conjunto de la nación. No son “élites”, no son grupos capaces de expresar alguna forma del interés general, sino que se ven forzados, sin más, a mandar. La revuelta obrera y estudiantil de 1969 hacía esa inexistencia de las élites más evidente que nunca.

Pero con el Cordobazo, por poner un punto de referencia arbitrario pero evidente, también aparecen otros tres elementos que van a dar forma al caracol de fuego en el que se guardará la nación en los años siguientes. El primero: la preocupación por el populismo no desapareció, pero se disolvió en un fantasma mayor como el de la sublevación. Quienes protagonizaron el Cordobazo eran obreros y estudiantes que no necesariamente venían del peronismo, y que en muchos casos habían construido sus liderazgos en la lucha *contra* la burocracia sindical peronista. Dirigentes de izquierda, socialistas moderados, radicales radicalizados, marxistas maoístas, católicos enervados, peronistas expectantes. Y, sin embargo, esas distinciones tan relevantes también quedaban en la neblina de los volantes impresos en talleres clandestinos. Todo tan politizado pero lo que volvía era lo social, el sedimento fértil en el que florecían mil organizaciones. Tanto folleto y metralleta, pero el problema de fondo seguía siendo la sociedad que producía la política, y no al revés. En pocas palabras, alguien reactualizaba las viejas preocupaciones antipopulistas para un presente feroz: “La guerrilla está en las fábricas”.

Ese es Ricardo Balbín, el 20 de octubre de 1975. Ni los cuarteles de La Habana, ni el barrio cerrado de Madrid en el que Perón había pasado años delirando las incongruencias sanguinarias que lo traerían de regreso, ni la sede de Montoneros, ni las universidades, ni los campos de entrenamiento del ERP, ni los focos aniquilados

en Tucumán, ni los terrenos inaccesibles de la Patagonia. La fábrica. Ese espacio urbano definido en los contornos del proyecto civilizatorio de la ciudad, ese edificio que en 1894 anunciaba desde el fondo del cuadro de Ernesto de la Cárcova que la ilusión sarmientina estaba pariendo un Moloch. La fábrica que Germani imaginó repleta de obreros desorientados en busca de un padre generoso y golpeador. En 1971, Miguel Murmis y Juan Carlos Portantiero publicaban *Estudio sobre los orígenes del peronismo*. Estos hijos dilectos de la sociología germaniana habían producido una sobria refutación de aquella teoría y mostraban que las fábricas de 1945 no reunían solo a inmigrantes confundidos. Los obreros peronistas de aquel entonces, revelaba el libro, llevaban un tiempo asentados en el conurbano, tenían una buena dosis de experiencia política y se movilizaban más allá de la espontaneidad en organizaciones que en muchos casos ellos mismos habían formado. En la fábrica y en la revuelta, los obreros no parecían desorientados y estaban en pleno uso de sus facultades.

En los años setenta, la fábrica es una máquina de producir terror, aterrorizados, terroristas. Obreros. En la entrada al despeñadero, visto todo desde arriba de una pila de cadáveres, la fábrica. Ese lugar santificado por muchos y que otros, más inteligentes, como Rodolfo Walsh, no veían como el caldo del cual saldría la revolución sin más trabajo que la corroboración empírica de la explotación, sino como el espacio al que había que dedicarse día y noche, con los delegados, con los folletos, con los obreros, para crear el descontento. Esa es la fábrica en la que va a estar la guerrilla.

Balbín no cree en estadísticas; tiene razón analítica, porque lo que da vitalidad a todo un imaginario moderno sobre la violencia política es, efectivamente, la emancipación obrera, el enojo con esos medios de producción que son al mismo tiempo el signo distintivo de una fuerza viril y de un poder, el de producir. La guerrilla se expande desde 1969 por barrios y cañadas. Pero es en esas enormes plantas industriales, aquellas como las que se extendieron en Córdoba durante la década peronista, con sus enormes cadenas de montaje y su producción automotriz para una sociedad próspera, donde la firme distinción política entre el peronismo y el marxismo y entre el populismo y la revolución se desvanecía para convertirse en una preocupación común para los defensores del orden: el acecho de la revuelta social.

Este viejo adversario despide a un amigo,

dice Balbín ante Perón, que lleva cuatro días muerto, recostado y con su uniforme militar. Balbín no divaga, habla cronologías. Balbín usa siete palabras para hacer la disección de un síntoma de tres décadas, un corte diacrónico entre dos formas de Perón y una sola de Balbín. Ese viejo adversario del movimiento que había llegado para desafiar el orden y la disciplina de un sistema injusto despedía al amigo que había puesto su prestigio al servicio de una maquinaria represiva demencial con la que buscaba en el último tranco de la vida lograr lo que no había podido en décadas. Entre el amigo y el adversario había pasado el peronismo como un río caudaloso que se abría hacia un océano de sangre, y Balbín casi golpeaba ese cajón desesperado, implorando que volviera el amigo para ayudarlo, esta vez sí, a liquidar al adversario.

¿Qué había pasado entre 1969 y 1975? Había pasado Córdoba, la Turín de la Argentina, el territorio de frontera que había imaginado Aricó, tironeada entre su cara oeste mirando al desierto bárbaro y su cuerpo oriental y moderno, poblado de fábricas y de trabajadores que habían desafiado al régimen en su momento de mayor bonanza económica. En Córdoba el peronismo había muerto en su ley, allí se habían realizado con más fidelidad los sueños de un país fabril con los que se entretenía el general: con las empresas de servicios públicos, con las poderosas industrias militares de Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado (IAME) y sobre el final, en 1954, con la llegada de los gigantes Fiat y Kaiser. En la década siguiente, estas industrias cambiaron el paisaje pueblerino de Córdoba y le dieron a la Argentina el retoque modernizador que peronistas, desarrollistas, nacionalistas y tantos otros soñaban: las automotrices produciendo en fábricas modernas para un mercado de masas. E, inevitablemente, le dieron también una robusta clase trabajadora que creció en una Argentina diferente a la que le había dado forma al peronismo en 1945 y que, lejos de seguir ciegamente los dictados del general desde el exilio, se volcó a una política combativa que incluía y excedía el legado peronista. Los obreros cordobeses, como los negros de Santo Domingo que lideraron la primera república negra que abolió la esclavitud en el mundo, estaban razonablemente bien pagos y tenían una organización aceitada. “A mí me echaron los obreros mejor remunerados del país”, llegó a decir Krieger Vasena, perplejo, no sin razón, por la ausencia de una correlación perfecta entre explotación y resistencia. En verdad, con el final de Onganía, por Córdoba pasaron tres tormentas que anunciaron el comienzo de un nuevo régimen marcado por el final de la Argentina igualitaria.

Una de esas tormentas fue la desaparición de aquella confluencia entre una dinámica económica, una vida so-

cial y un sistema político definidos por un horizonte de progreso. A fines de los años treinta, el gobernador radical Amadeo Sabattini construyó sobre la calle Roque Sáenz Peña, en el borde del centro de Córdoba, la Escuela Presidente Sarmiento, uno de los edificios más atractivos de la ciudad, y una de las cien instituciones educativas levantadas durante su gobierno bajo un lema de campaña que, como gobernador de la década infame, bien podría haber abrazado el peronismo y muchos de quienes lo sucedieron: “agua para el norte, caminos para el sur y escuelas por todas partes”. Es un edificio de vanguardia, imponente, un monumento a la educación más que una simple infraestructura, que sobresalía aún más en su momento en un barrio de casas bajas y calles arboladas. A comienzos de los años cincuenta, durante el peronismo, un aula de la escuela de estilo modernista podía incluir a Guillermo Bolger, un niño de clase media habitante de una de esas casas modestas, levantada por su padre con un crédito barato de los que abundaban en los primeros años del gobierno de Perón. En el aula de un grado superior podía sentarse Aldo Roggio, el hijo de Vito Roggio quien, para esa época, lideraba una de las empresas de construcción más grandes de la Argentina, fundada a principios de siglo. El edificio de la familia, a menos de 200 metros de la escuela, era uno de los pocos que competía con esta en altura y adelanto. Y en el aula de al lado podía estar Dardo Domínguez, hijo de una familia que recién llegaba a Córdoba desde el norte del país y vivía a solo tres cuadras en la villa 990. A metros de las oficinas de la constructora más grande de la Argentina, la 990 no tenía ninguna construcción de material y era reconocible como un conjunto precario de carpas. La Argentina peronista no era una nación de iguales, como lo demuestra la disparidad abismal entre estos alumnos. Pero era un país en el que el ideal igualitario era un proyecto realizable. Y esa posibilidad no estaba dada solamente por la presencia del peronismo sino, como lo simbolizaba aquella escuela pública modernista con el nombre de Sarmiento construida durante la década infame, por una formación social histórica que en esos años se hacía más palpable que nunca antes ni después. La década del cuarenta representaba en la educación, en la mejor tradición sarmientina, la ilusión de la movilidad social.

Escuela Presidente Sarmiento, ciudad de Córdoba.

En 1969, los obreros luchaban contra las fuerzas de seguridad en las calles de Córdoba no solo por un salario que, como señalaba Krieger Vasena, era de los mejores del país. Marchaban con piedras, palos y (por entonces muy pocas) armas porque habían encontrado en el discurso clasista del sindicalismo de izquierda y del peronismo combativo una forma de denunciar la muerte de aquella promesa igualitaria, que así como se desvaneció, tampoco iba a retornar. Aquellas élites frustradas por el espíritu revoltoso de las bases (“¡la gente no se queda quieta!”), se quejaba Henry Ford de los obreros durante la expansión de la cadena de montaje) desmantelaron en las décadas siguientes los instrumentos que daban verosimilitud a la idea misma de una ciudadanía social. Desde la apropiación del excedente agropecuario, que en 2007 se convertiría en el núcleo simbólico de la resurrección triunfal del antipopulismo, hasta el financiamiento de la escuela pública y el poder de los sindicatos, todos se convirtieron en blancos de un trabajo sistemático de socavamiento y erosión. En la Argentina que emergió al otro lado de este proceso, en el siglo XXI, el edificio algo deteriorado de la Escuela Sarmiento aún sobresale en el horizonte cordobés sucio y empobrecido, más como evocación melancólica que como sueño integrador.

El segundo cambio asociado a la liquidación del horizonte igualitario fue la evolución del aparato represivo destinado a domesticar de una vez por todas el espíritu plebeyo nacional. La nación se define en parte por la continuidad jurídica y esa continuidad se expresa clara y puntual en su estructura represiva. Se expresa en la frustración por no poder hacer realidad una integración ordenada, el caudal antipopulista de la Argentina recorre un cauce profundo sostenido en la capacidad de ejercer la violencia contra la sublevación. Se expresa en la Ley de Residencia sancionada por el orden conservador y que Perón llegó a usar contra los trabajadores ferroviarios, porque al fin y al cabo Perón pasó buena parte de su vida tratando de contener insurrecciones propias y, como esta, ajenas. En el Plan Conintes elaborado por Frondizi para poner fin a la amenaza comunista, pero cuyo origen había sido la Ley 13.234 sancionada por el peronismo en 1948 y denominada “Preparación de la Nación para tiempos de guerra”. En la Ley de Seguridad Nacional sancionada por Onganía que proveyó los argumentos jurídicos para una renovación formidable de la intervención militar en asuntos internos. En la liquidación de la guerrilla por parte de los gobiernos de Perón primero y de Isabel Perón después que se transformó en un conducto para la dictadura militar que derrocará a la propia Isabel en 1976.

Los tres años monstruosos del peronismo en el poder que van desde el final atolondrado de la dictadura en 1973 al comienzo de la siguiente en 1976 fueron el corolario de aquella exasperación de las élites, ahora extendida a toda una sociedad marcada por la violencia política. Argentina no entraba en su zona oscura por el retorno del peronismo, sino a causa de la desaparición irreversible de las formas populistas de integración social

como las que el propio peronismo ofrecía décadas atrás en aquellas aulas cordobesas. La terquedad de los grupos dominantes y la visión estrecha del peronismo sobre el poder de la movilización social abrían un espacio generoso para la violencia. En esa corroboración estaba el impulso hacia el cambio social mediante la violencia política, no solo para Castro, Guevara y sus seguidores, sino para un radio mucho más amplio que abarcaba incluso a quienes no simpatizaban con la lucha armada pero podían ver la justicia de las decisiones de algunas variantes. Es lo que llevó a Aricó, una década después, a reflexionar sobre la izquierda argentina y a decir, sin las vueltas en las que se escondían otros, una frase cargada de sentido y que estaba más allá de la flagelación o la condena: “En los setenta, algunos más, otros menos, fuimos todos montoneros”.

Lo eran porque aun quienes veían sus falencias, el infantilismo de sus acciones, lo problemático de su ideología y el deterioro ético de sus dirigentes, sentían en el despliegue ascendente de Montoneros una invitación a soñar con los ojos abiertos sobre un destino en el que se jugaba el futuro de toda la izquierda y, por qué no, de una nación.

Ominosamente, no se equivocaban. Finalizado el tramo Onganía de la Revolución Argentina, la frustración violenta desde arriba se volcó contra la combinación de la sombra perenne de la sublevación plebeya con la novedad de las guerrillas. Esa fijación autorizaba moralmente la continuidad de la violencia estatal que, por supuesto, se nutría desde los bordes del propio Estado con la confrontación a esta amenaza por parte de los grupos paramilitares de derecha. De ahí que la expresión de Balbín sobre las fábricas como origen de la guerrilla permitía la identificación de varios protagonistas bajo una misma causa. Cuatro días después de Balbín, Álvaro Alsogaray declaraba que “hay soviets en las fábricas”. Para ese entonces la fábrica ya producía más significantes que bienes, era más una trinchera que una industria, era el *locus* de una obsesión por el control social que en 1976 llegaría a un punto culminante y sin retorno.

Pero esa continuidad de la violencia estatal no fue solo una lectura de lo social a través de un dispositivo jurídico y militar, sino también un paso fundamentalmente político, que implicó la producción de un lenguaje y una retórica que presentaba a la lucha por la igualdad como una amenaza a la estabilidad política e impugnaba a sus protagonistas como elementos extraños a la nación, deshumanizando al adversario y justificando así su eliminación como condición necesaria para recuperar la paz. Con los proyectos populistas en un pasado cada vez más lejano e idealizado, la radicalización de la violencia de las guerrillas era al mismo tiempo la respuesta desahuciada ante un horizonte inamovible y la llave esperanzadora para un futuro que muchos veían al alcance de la mano. Pero esa ambivalencia presentaba el problema de justificar acciones que se concebían como revolucionarias en un marco político democrático, y eso es mucho más que una incongruencia. Ante el despliegue de la lucha armada concebida como un recurso legítimo para la transformación social, las Fuerzas Armadas diseñaron junto con el gobierno peronista el dispositivo legal y la jerga política que luego le daría coherencia al terrorismo de Estado.

La tercera y última transformación de este período tiene que ver, precisamente, con el peronismo. Vistas hoy, las esperanzas puestas en el retorno de Perón desde 1970 eran una muestra elocuente de las carencias políticas sobre las que se montaba el futuro. Perón llegaba envejecido, rodeado de una comparsa inverosímil y después de haber pasado los últimos años deambulando sin mayor sentido de la orientación. Que las ilusiones de una nación estuvieran depositadas en su retorno hablaba, claro, de la marca imborrable que el populismo había dejado como un proceso acelerado de emancipación y mejora económica, política y cultural. Pero también evidenciaba el vacío que había dejado el final de aquella experiencia y en el que se hundiría esa ilusión, aunque para ver eso en aquel momento había que estar del otro lado de los márgenes, como quienes lo veían perplejos desde mucho antes. Hacia 1963, personajes marginales como los poetas malditos del grupo Opium encontraban en ese espacio irresponsable la clarividencia que le faltaba al resto de la sociedad. “Nos conocimos orinando en baños donde leímos que Perón o Tarzán nos salvarían”, decían en su manifiesto de 1963, con más clarividencia que nihilismo: “Nos miramos a los ojos y sonreíamos: ninguno quería ser salvado”.

Los tres años de antesala a la dictadura militar están marcados por el involucramiento enfático del peronismo en la producción de los recursos legales, discursivos y materiales para legitimar el terrorismo de Estado que, desde 1976, va a tener como objetivo general la aniquilación del espíritu levantisco que el propio peronismo había ayudado a convertir en una marca distintiva de la sociedad argentina y que ahora se expresaba a través de la violencia armada por dentro y fuera de él. El imaginario de la frase balbinista que se había extendido al resto de la sociedad era que, tanto vivo como muerto, Perón era mucho más claramente el amigo que el adversario a la hora de instalar la idea de que la paz social solo podía alcanzarse mediante la excepcionalidad jurídica que habilitara la aniquilación de las guerrillas por parte de las Fuerzas Armadas para terminar así con “el problema

de la violencia” que era definido, sin ambivalencia, como violencia de izquierda.

En ese momento se produce uno de los cambios fundamentales de nuestra historia:

Desde entonces, la amenaza populista deja de estar necesariamente atada al peronismo para referirse más bien a un legado que ahora era propiedad de las clases bajas en su conjunto. Y, en más de una oportunidad, aquellos que hacen del antipopulismo su identidad vital llegarán a ver en distintas versiones del peronismo a un aliado útil y necesario.

En uno de los análisis más detallados del período 1973-1976, Marina Franco señaló con precisión las poderosas continuidades entre esa época y la dictadura posterior, relativizando la percepción generalizada de que el golpe de Estado del 24 de marzo significó una ruptura tajante respecto de la evolución de la violencia estatal y de las formas en las que esa violencia fue legitimada por amplios sectores de la sociedad. El despliegue de la Alianza Anticomunista Argentina (AAA) y el Operativo Independencia para la eliminación de la guerrilla en Tucumán son referencias obvias, pero lo que germinó en esos años tuvo que ver, sobre todo, con el otorgamiento público de un manto de excepcionalidad para legitimar la violación a los derechos humanos como necesidad de toda la sociedad. Hacia 1975, la expresión política de esa sociedad iba quedando circunscripta a la opción entre una versión heroica del accionar interno de las Fuerzas Armadas y una interpretación demoníaca de la subversión. El gobierno peronista fue parte fundamental de ese conjunto más amplio en la construcción de un espacio público tolerante y hasta simpatizante con la aniquilación no solo de las guerrillas, sino del activismo de izquierda y sindical que producía la agitación en la que abrevaban. Así fue como se sucedieron los decretos de aniquilamiento: el Decreto 261 de 1975 que creaba el Operativo Independencia y habilitaba a las Fuerzas Armadas a “neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos” en Tucumán, y los decretos 2770, 2771 y 2772 de ese mismo año que extendieron la intervención militar a todo el resto del país.

El espacio exiguo que quedaba para imaginar una restitución del orden social sin recurrir a la violencia resaltaba las limitaciones suicidas de las ideas dominantes sobre el disciplinamiento social. Dentro y fuera del peronismo, muchos imaginaban que el llamado eterno a contener la protesta social podía separarse fácilmente de la coerción violenta. Y que esta, una vez desatada, podía ser contenida y limitada a un trato quirúrgico contra el accionar militar de las organizaciones armadas. Así fue como en 1974, mientras Isabel Perón llamaba a “erradicar la reacción terrorista definitivamente”, Balbín la visitaba convencido de que el poder civil podía limitar el accionar parapolicial y le decía: “No tiene que buscar afuera a los responsables de lo que está pasando, sino acá”. Balbín quería referirse a José López Rega, que estaba sentado junto a la presidenta, pero la frase podía ser extendida a los tres protagonistas de esa escena. Poco menos de un año más tarde Isabel Perón redobló su compromiso con las Fuerzas Armadas mientras Balbín, liberado de toda ilusión, señalaba la fábrica como el lugar por el que debían empezar. Alimentando el fuego desde el borde del infierno, el canciller peronista Manuel Arauz Castex le aseguraba a Henry Kissinger en Nueva York: “la subversión no hace peligrar al gobierno”, mientras Antonio Cafiero, ministro de Economía, celebraba en Buenos Aires la ratificación del compromiso de la presidenta con las Fuerzas Armadas. “Acentuaremos la lucha sin pausa contra el terrorismo económico, aliado y socio de la subversión”, decía Cafiero, saco en mano y sobreactuando la agitación.

El de Cafiero era el tipo de discurso que buscaba mostrar fortalezas y revelaba las carencias. Había aterrizado en el Ministerio de Economía en reemplazo de Celestino Rodrigo, quien meses antes había fracasado estrepitosamente en la aplicación de un programa de estabilización ortodoxo que devaluaba el peso un 60% y autorizaba incrementos superiores al 100% en servicios, transporte y combustible. El plan no solo no contuvo la inflación, sino que la hizo viral. Y ahí, en esa forma específica del fracaso, se abría la respuesta a una discusión central sobre la continuidad entre esta época y lo que siguió. El peronismo como gobierno había abrazado la causa del disciplinamiento económico y la coerción, pero era incapaz de implementar ninguno de los dos de forma efectiva y exitosa. Tras haber renunciado hacía tiempo a corporizar la demanda por una sociedad más justa, una parte importante de su dirigencia se mostraba impotente tanto ante la puja distributiva como ante la lucha armada. Solo un cambio de régimen y la instauración de un nuevo gobierno podía realizar una demanda de orden y disciplinamiento antagonista que en buena medida había empezado a tomar forma en la reacción contra la irrupción del peronismo, por lo que difícilmente pudiera tenerlo como aliado. Era ese carácter clasista que alimentó a la dictadura lo que el peronismo no podía representar íntegramente y que haría de la venganza de clase un componente destacado del antipopulismo que permeó la mirada de la dictadura militar sobre los males que debía erra-

dicar para restaurar el destino de la nación.

Dirigido durante 1957 por el catamarqueño Vicente Saadi y Fermín Chávez, *Populista* fue la primera expresión política –y una de las pocas– que se apropió como emblema de la calificación que sus adversarios usaban como epíteto. “Populismo” emergía como una categoría de análisis que cuestionaba la independencia y el buen juicio de las masas en política; la consigna que acompañaba a *Populista* parecía una respuesta elocuente: “Venimos a hacer porque estamos cansados de oír.”